

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas persigue regular los siguientes aspectos: la estructura orgánica de la Agencia, los fines y competencias del organismo, y el régimen económico, patrimonial, presupuestario y de personal aplicable a la Agencia.

El proyecto de Real Decreto consta de un único artículo, aprobatorio del Estatuto de la Agencia, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, y tres disposiciones finales. Por su parte, el Estatuto Orgánico de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas consta de 43 artículos, organizados en ocho capítulos.

Finalmente, cabe mencionar que la norma se circunscribe al ámbito de aplicación de la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes, sin afectar el presente Real Decreto al orden de distribución de competencias previsto en la Constitución.

Tal y como se indica en la exposición previa al articulado de esta norma su aprobación se enmarca, a su vez, en la aprobación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, así como en la necesidad de constituir un organismo que articule la gobernanza del sistema público de evaluación de políticas públicas con el objetivo final de aprobar el Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, de acuerdo con la autorización recogida en el artículo 29 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, y con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, la aprobación del presente estatuto, además, es el hito 149 del Anexo revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, en adelante hito CID, acordados con la Comisión Europea para verificar el progreso del Componente 11 y, en su caso, aprobar el libramiento de los fondos del mecanismo *NextGenerationEU*. Este Real Decreto da cumplimiento a los objetivos fijados por la Comisión Europea en el citado hito CID 149, que son: i) proporcionar al organismo público de Evaluación Nacional la capacidad y los medios para ejercer sus funciones en materia de estandarización metodológica para la evaluación ex ante de políticas públicas; (ii) realizar evaluaciones de políticas públicas y (iii) incluir el principio sistemático de evaluación ex ante de políticas, con las excepciones previstas en la Ley.

En la tramitación de la referida norma proyectada se ha sustanciado el trámite de audiencia o consulta pública entre el 18 de julio y 16 de agosto de 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II

En cuanto a la adecuación al marco jurídico actual en materia de protección de datos (RGPD y LOPDGDD principalmente) debe indicarse que si bien la norma proyectada, por su propia naturaleza, se trata de una norma de carácter eminentemente organizativa, tanto la estructura como los tratamientos de datos personales que se lleven a cabo derivados del ejercicio de las funciones que se recogen, deben observar el citado marco normativo.

Por poner un ejemplo el referido Real Decreto contempla entre los fines específicos de la futura Agencia la promoción e impulso de mecanismos de colaboración, con Administraciones y organismos o entidades públicas tenedoras de información o vinculados al tratamiento de datos (artículo 3.2.b)).

Sin embargo, en la norma proyectada no se encuentra indicación alguna en relación a la normativa de protección de datos personales, y tanto en la gestión ordinaria interna del organismo como en las funciones específicas que se atribuyen, pueden producirse tratamientos de datos de carácter personal.

Recuérdese que el RGPD considera como tal *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión,*

difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.

Asimismo, y en relación con la actividad de la futura Agencia cuya proyección en el ámbito internacional se contemplan en diversos lugares de este Estatuto, tal y como sucede en el artículo 5.3 en relación con la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con organismos internacionales; en la cooperación interinstitucional con otras administraciones, agentes e instituciones, públicas o privadas, nacionales e internacionales, prevista como uno de sus principios de actuación en el artículo 8.f); o en la previsión como una de sus competencias de la representación de la Administración General del Estado ante organismos e instituciones internacionales en materia de evaluación de políticas públicas (artículo 9 ñ); debe recordarse la necesidad de que cuando se produzcan transferencias internacionales de datos personales, se observe lo indicado en el RGPD, que dedica a estas cuestiones su Capítulo V “Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales”.

En conclusión, a juicio de este Servicio Jurídico resulta incuestionable la necesidad de que en el Estatuto de la proyectada Agencia, y sin perjuicio de que como se ha dicho antes sea una norma eminentemente organizativa, **conste una mención específica a la protección de datos personales.**

En consecuencia, resultaría adecuado incorporar un precepto específico referido a la protección de datos de carácter personal. Se propone la adición de un artículo, que por la interpretación sistemática de la norma se estima adecuado que podría incorporarse como un nuevo artículo dentro del capítulo primero de Disposiciones Generales, o dentro del capítulo segundo sobre Principios, competencias y régimen de actuación, y que bajo la rúbrica “Tratamiento de datos personales”, tuviera el siguiente contenido:

Artículo XXX. Tratamiento de datos personales.

El tratamiento de datos personales realizado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en el ejercicio de sus competencias se hará de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

De este modo, al incorporarlo en la propia norma, la actuación de la proyectada Agencia quedaría con ello y con carácter general salvaguardada en cuanto se refiere la previsión del respeto a dicha normativa, respeto que habría de ser

garantizado en cada caso con las medidas adecuadas y necesarias a adoptar según los tratamientos que fueran a llevarse a cabo.

III

En este orden de cosas, es preciso recordar que el artículo 29 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, autoriza la aprobación del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas ante la necesidad de constituir un organismo que articule la gobernanza del sistema público de evaluación de políticas públicas.

“1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se autoriza la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, como organismo público con personalidad jurídica pública y patrimonio propios y plena capacidad de obrar. En el ejercicio de sus funciones de evaluación la Agencia actuará con independencia y autonomía.

2. La actuación de la Agencia responderá a los siguientes fines:

a) La supervisión, coordinación e impulso del sistema público de evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

b) La coordinación, acompañamiento y apoyo a los departamentos ministeriales en las materias recogidas en las disposiciones de esta ley.

c) La promoción de las relaciones institucionales con los sistemas de evaluación de políticas públicas de otras administraciones públicas.

d) La realización de aquellas evaluaciones que se determine.

3. De acuerdo con los fines enunciados, corresponderá a la Agencia, sin perjuicio de su desarrollo estatutario:

a) La formulación y difusión de metodologías de evaluación.

b) La definición de indicadores generales de evaluación ex ante.

c) El diseño, gestión y seguimiento del Sistema de Indicadores Comunes del artículo 14.

d) La elaboración de la propuesta del Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno.

e) La aprobación de los Planes de Evaluación departamentales.

f) La realización del Informe de Evaluabilidad de las políticas públicas incluidas en el Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno.

g) La elaboración de la Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas.

h) El desarrollo de un mecanismo de coordinación para el seguimiento de los resultados y la verificación del cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones.

i) El fomento de la cultura evaluadora y de la formación de las empleadas y empleados públicos en evaluación de políticas públicas.

j) La elaboración de la propuesta de una estrategia de ámbito estatal para reforzar el sistema público de evaluación en las administraciones públicas.

k) La cooperación con otras administraciones públicas en materia de evaluación.

l) La promoción de la colaboración con Universidades y otras instituciones de investigación.

m) Representar a la Administración General del Estado ante organismos e instituciones internacionales en materia de evaluación de políticas públicas.

n) La actualización del portal temático de evaluación de políticas públicas.

ñ) La emisión de informe preceptivo sobre la regulación específica en materia de evaluación que se adopte en las actividades de evaluación referidas en el artículo 3.4.

o) Cualesquiera otras que le asigne la normativa vigente.

4. Estará adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública. Se registrará por lo establecido en su estatuto orgánico y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y la representación y defensa en juicio de la Agencia, corresponderá a los abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado”.

A la vista del contenido del precepto ut supra transcrito, los tratamientos de datos de carácter personal que se puedan realizar por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en el ejercicio de las funciones y persecución de los fines previstos en dicho precepto legal quedarían legitimados, con carácter general, conforme a lo previsto en la **letra e) del artículo 6.1 del RGPD**: “*el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento*”.

Asimismo, en cuanto a otros tratamientos que se puedan realizar en cumplimiento de un deber de cooperación con terceros o cualesquiera otros previstos legalmente como ocurre con la previsión del artículo 29.3.k) “*cooperación con otras administraciones públicas en materia de evaluación*”, la base jurídica sería la determinada por la **letra c)** del citado artículo 6.1 del RGPD: “*el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento*”.

En ambos casos se cumpliría, además con el **principio constitucional de reserva de ley** que recuerda el artículo 8 de la LOPDGDD:

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley

Todo ello sin perjuicio de la eventual concurrencia de otras bases jurídicas de legitimación según el tratamiento que se dé en cada caso.

IV

En relación con la adecuación de la estructura administrativa y funcional de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y sin perjuicio de la autonomía organizativa de dicho organismo, es preciso recordar que el artículo 37 del RGPD, establece lo siguiente (el subrayado es nuestro):

1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala,

c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.

(...)

3. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.

4. En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el responsable o el encargado del tratamiento o las asociaciones y otros organismos que representen a categorías de responsables o encargados podrán designar un delegado de protección de datos o deberán designarlo si así lo exige el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El delegado de protección de datos podrá actuar por

cuenta de estas asociaciones y otros organismos que representen a responsables o encargados.

5. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39.

6. El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

7. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.

Es decir, la proyectada Agencia en tanto organismo público, y en cuanto a la hipotética posibilidad de llevar a cabo tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos, tanto por volumen como por ámbito territorial, como por las acciones en sí llevadas a cabo ex artículo 9 RGPD **debe designar un Delegado de Protección de Datos.**

Por lo tanto y sin perjuicio de que la figura de Delegado de Protección de Datos se puede ostentar a través de un puesto “ordinario” en la Relación de Puestos de Trabajo (en el sentido de poder ser de rango inferior a Subdirector General y no constar expresamente en el Estatuto) e incluso a través de una contratación externa, resultaría adecuado una mención a dicha figura por ser una figura esencial en el nuevo modelo de cumplimiento basado en la responsabilidad proactiva que impone el vigente RGPD, tal y como reiteradamente se ha pronunciado este Gabinete jurídico.

En consecuencia, se propone **que se incluya entre las funciones del Consejo Rector** como una nueva letra del actual artículo 13: “*Designar al Delegado de Protección de Datos, que actuará de forma independiente, y al que se dotará de medios personales y materiales para el ejercicio de las funciones atribuidas por la normativa vigente*”.